

EDITORIAL

Deuda con la educación sexual

Las cifras de embarazo adolescente en el norte del país vuelven a encender una señal de alerta que Chile no puede seguir abordando únicamente desde la contingencia.

Que regiones como Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota lideren los índices nacionales no es una casualidad estadística, sino el reflejo de profundas brechas sociales, educativas y sanitarias que persisten desde hace años.

Detrás de estos números existen múltiples factores que se entrecruzan: migración, pobreza, ruralidad, barreras geográficas para acceder a servicios de salud y una evidente falta de educación sexual integral y oportuna.

La combinación de estos elementos configura un escenario complejo que afecta principalmente a adolescentes en contextos de mayor vulnerabilidad social.

La realidad del norte tiene características parti-

culares que exigen políticas diferenciadas y con enfoque territorial.

La alta presencia de población migrante, por ejemplo, incorpora nuevas dinámicas culturales y dis-



El embarazo adolescente no puede analizarse únicamente como una problemática sanitaria”.

tintas visiones respecto a la sexualidad, la maternidad y el acceso a métodos anticonceptivos. Ignorar esa diversidad solo dificulta aún más la capacidad del sistema para responder adecuadamente.

La Educación Sexual Integral aparece como una

herramienta indispensable.

Pero para que realmente cumpla su propósito, debe dejar de entenderse como una materia ocasional o limitada a contenidos biológicos.

El embarazo adolescente no puede analizarse únicamente como una problemática sanitaria. También es un fenómeno profundamente vinculado a desigualdades estructurales, oportunidades de desarrollo y acceso a información de calidad.

Cada caso implica, muchas veces, trayectorias educativas interrumpidas, precarización económica y mayores dificultades para romper círculos de vulnerabilidad.

Cabe recordar que existe la Ley ESI (Ley N° 20.418), que establece el derecho de los estudiantes a recibir educación sexual integral, continua, basada en evidencia científica y con enfoque de derechos.